

La avaricia rompe el saco

Eso dice el refrán, y con mucha razón. Hoy estamos viviendo los momentos previos a la "rotura". Nuestros políticos y nuestros tecnócratas, al servicio del capital financiero y especulador, se están encargando de llenar dicho saco –el de los especuladores- hasta el punto de que las costuras ya están empezando a ceder. Pero esa actitud no se da únicamente en lo económico, sino también en lo político.

En ocasiones toman medidas que son engañosas, y que pueden parecer, incluso, deseables. Es el caso del "adelgazamiento político" que conllevará la desaparición de múltiples concejales, y de funciones municipales en multitud de ayuntamientos.

A primera vista parece una medida eficaz, máxime cuando se nos afirma desde el gobierno que con ella vamos a tener un ahorro considerable. Solo la centralización de servicios (basuras, alcantarillado o alumbrado) van a representar, según el Ministro de Hacienda, la nada despreciable cantidad de 2.248 millones de euros.

Son muchas las voces que se oyen valorando positivamente la medida. Tantas que uno no llega a entender como puede la gente ser tan tonta.

Sí, porque en realidad estamos ante un pase de capote que nos engaña y desorienta, lanzando nuestra embestida al puro vacío. Seamos mínimamente lógicos. Estamos hablando de 2.248 millones de euros. Si los comparamos con el fraude fiscal reconocido y valorado en más de 70.000 millones de euros anuales (redondeemos a 70.000 millones justos), ello representa un 3,21% de dicho fraude. Nos parece fantástico ahorrarnos el 3,21%, y dejamos de percibir el 96,79% ¡¡Que listos somos!!

Pero es que además ese 3,21% no va a ser tal. ¿Nadie se da cuenta de que este es el primer paso para privatizar estos servicios a favor de alguna de las empresas vinculadas a los políticos que las proponen? ¿Nadie se da cuenta que una vez privatizados, las empresas concesionarias subirán las tarifas y seremos nosotros, los pobres ciudadanos, los inmediatos perjudicados, y además con un peor servicio? Quien no se da cuenta es que no ha aprendido nada en toda su vida.

La Administración puede que se ahorre dinero, pero el ciudadano seguirá pagando ese ahorro, pero multiplicado por un factor aumentativo, que servirá para enriquecer a los de siempre.

La reducción de políticos, tal y como se plantea, es una falacia. Que la representación política, y su estructura, puede reducirse y modificarse es una cuestión en la que no cabe ninguna duda. Que los costos de la misma deben ser mucho menores, tampoco. Pero todo ello debe hacerse, no reduciendo la representación del pueblo, sino incrementándolo. Y ello es plenamente factible. Para empezar, debemos considerar que elementos de representación lo son realmente y cuales no. Es evidente que el senado es un ente arcaico, carente de representatividad real, y muy caro. Por tanto este debería ser el primer elemento a eliminar.

Somos herederos de un proceso político que ha sido alabado y considerado como ejemplar, la llamada Reforma Política. Nada más lejos de la realidad. Fue una auténtica chapuza, empezando por la reinstauración de la monarquía, una institución totalmente carente de sentido y antidemocrática por su propia naturaleza, y siguiendo por la incapacidad de apartar del poder a los representantes del Antiguo Régimen (reconvertidos en franquistas), que pretendían mantener un estado centralista, a la forma del antiguo absolutismo. Pero a la vez había que contentar a los representantes de las distintas nacionalidades que confluyen en la que ha venido llamándose España. De ahí nació un doble estado, el estado central, por una parte, y el de las Autonomías, por otra. Ello conllevó a la duplicidad del aparato político y administrativo.

Si hubiéramos sido capaces de lanzar por la borda los restos del Antiguo Régimen, el estado español sería un estado federal, con una clara distinción de funciones políticas, las correspondientes al estado central y las propias de los gobiernos regionales, sin interferencias ni duplicidades, y con el consiguiente ahorro económico. Y todo ello redundando en una mayor democracia. No debemos olvidar que cuanto mayor es la distancia entre los políticos y la estructura administrativa, respecto al ciudadano, menor es la realidad democrática. La democracia delegada es en realidad una falacia.

Hoy, los defensores del absolutismo y del centralismo (que prefieren estado fuerte a ciudadano fuerte), enarbolan la bandera de la simplificación política como necesidad de racionalización y ahorro. Y como no hay nada tan peligroso y perverso como las medias

verdades, con ella pretenden reconducir la estructura del estado a un sistema mucho más autoritario, consiguiendo el aplauso de muchos que, desencantados de nuestro modelo actual, no se dan cuenta de los enormes peligros que tal opción implica.

Pero los costes económicos de nuestra estructura política no solo obedecen al número de políticos en activo. Dos son los hechos que determinan el enorme coste actual. En primer lugar la forma en que se asignan sus retribuciones. Es absurdo que sean los propios interesados los que decidan cuanto van a cobrar. Como ya he apuntado en ocasiones anteriores, las retribuciones de los todos políticos, y sus incrementos, deberían estar regidos por ley y con independencia de quien este ocupando el cargo en un momento dado. Todas las retribuciones de los políticos deberían ser un múltiplo del salario base interprofesional, y sus incrementos estar ligados al mismo. La ley que estableciera la tabla de coeficientes a aplicar según el cargo, debería ser sometida a referéndum. El resto de condiciones inherentes, debería ser coherente con las imperantes para el resto de la ciudadanía (impuestos, cotizaciones a la Seguridad Social, etc.). No existe ningún motivo para que los políticos deban de gozar de prebendas (dietas, clases preferentes en transportes, etc.). Con solo estas medidas, estoy convencido del gran ahorro económico que se obtendría.

En segundo lugar, debería prohibirse terminantemente la designación de asesores y otros puestos de confianza. La administración pública está dotada de personal suficiente para cubrir todas las funciones necesarias. Las personas que un partido político presenta en sus listas deben estar capacitadas para asumir sus responsabilidades. Si no es así, que no se presenten, o que sea el partido, de sus propias arcas, el que asuma los costes de los asesores. La actividad política es totalmente voluntaria. Quien decide entrar en ella, lo hace de forma totalmente voluntaria, y debe asumir sus consecuencias.

Hay otro factor que ha contribuido al incremento exagerado de los gastos de la Administración. Un factor que, en muchos casos, merece el calificativo de delictivo, y en los que no, como mínimo, implica una honorabilidad más que dudosa. Me refiero a la connivencia entre Administración Pública y capital privado. El liberalismo imperante en los últimos años, con una presión cada vez mayor a favor de privatizar servicios públicos y poner en manos privadas la ejecución de proyectos públicos, ha conllevado costes desmesurados cuyo único fin ha sido en realidad llenar los bolsillos de empresas privadas a

costa del esfuerzo del ciudadano. Son innumerables los proyectos cuya funcionalidad y necesidad son más que cuestionables aprobados por políticos poco escrupulosos y que, curiosamente, han favorecido los intereses de empresarios afines a dichos políticos. Decir que estos sobrecostes son consecuencia de nuestra estructura política y no responsabilidad de los políticos, con nombre y apellidos, que han ocupado los cargos, es simplemente mentir.

Hoy se pretende contener los costes de la Administración por la vía de reducir la calidad de los servicios al ciudadano y su representación democrática. No nos engañemos, al reducir las representaciones políticas, sin por otra parte tocar el sistema electoral, se favorece la representación de las organizaciones mayoritarias, las mismas que nos han llevado a este desastre, cerrando la boca a las posibles minorías críticas. Pero las verdaderas causas del desaguado económico, ni se tocan.

Con ello, la presión sobre la sociedad seguirá aumentando. Mucho me temo que llegará el momento en que los sectores más radicales, viendo como este sistema, supuestamente democrático, es incapaz de resolver los problemas que padecemos, opte por una respuesta violenta. Volveremos a vivir tiempos que ya creíamos superados. Pero no debemos olvidar, si llega el caso, que los verdaderos responsables de ello serán quienes ha degradado y siguen degradando nuestra sociedad. Habrán roto el saco.